

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA  
SALA DE DECISIÓN

Magistrada ponente: ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES.

Santiago de Cali, diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

Auto Interlocutorio No. 65

Radicación:	76001-23-33-000-2022-00786-00
Acción:	Acción Popular
Demandante:	Jorge Ernesto Andrade <a href="mailto:Andradejorge293@gmail.com">Andradejorge293@gmail.com</a> <a href="mailto:Jorgeandrade293@hotmail.com">Jorgeandrade293@hotmail.com</a>
Demandado:	Superintendencia de Servicios Públicos <a href="mailto:sspd@superservicios.gov.co">sspd@superservicios.gov.co</a> Presidencia de la República <a href="mailto:notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co">notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co</a>
Procurador	Dr. Franklin Moreno Millán, correo@ <a href="mailto:procjudadm166@procuraduria.gov.co">procjudadm166@procuraduria.gov.co</a> <a href="mailto:fjmoreno@procuraduria.gov.co">fjmoreno@procuraduria.gov.co</a>
Instancia:	Primera
Tema:	Auto Rechaza demanda

I. PUBLICIDAD.

El expediente digital se encuentra en nuestra sede electrónica **SAMAI**, donde podrá consultar las actuaciones en el botón **“CONSULTA DE PROCESOS”** en el siguiente link <https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx>.

En SAMAI también encontrará la VENTANILLA VIRTUAL, link <https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8087/> donde los sujetos procesales podrán **radicar memoriales y escritos** para lo cual deben ingresar a la VENTANILLA VIRTUAL, dirigirse al módulo “Solicitudes y otros servicios en línea”, dar clic en “Memoriales y/o Escritos”, aceptar términos y condiciones, diligenciar el formulario respectivo anexando copia del documento de identidad que acredite su calidad dentro del proceso y cargar los archivos con destino al proceso en los formatos permitidos pdf, .docx, .doc, .xlsx. Tamaño máximo por cada archivo: 20 MB. Estos memoriales y escritos se gestionarán directamente al proceso, lo que garantiza celeridad, economía, eficiencia, transparencia y publicidad, **por tanto, es el canal oficial del Tribunal para recibir memoriales a partir del 16 de mayo de 2022.**

En el mismo link los usuarios podrán solicitar ACCESO A LOS EXPEDIENTES para consultar documentos protegidos por reserva, para ello deben dirigirse al módulo “Solicitudes y otros servicios en línea”, dar clic en “Acceso a expedientes” aceptar términos y condiciones, diligenciar el formulario respectivo y anexar el documento de identidad escaneado por ambos lados con el fin de acreditar su calidad dentro del proceso.

En el siguiente link podrá consultar un video tutorial que lo guiará en SAMAI: [acceso a la ventanilla virtual.webm](#).

Solo de manera subsidiaria continuarán recibiendo escritos y memoriales en el correo electrónico: [rpmemorialestadmvc Cauca@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:rpmemorialestadmvc Cauca@cendoj.ramajudicial.gov.co) identificando la radicación completa del expediente, el magistrado ponente, el medio de control, las partes y el asunto so pena de no gestionar el memorial. Las partes darán cumplimiento al artículo 78.14 del CPG.

Las partes informarán el canal digital elegido para surtir las actuaciones y notificaciones del presente proceso. **En su defecto se tomarán como tales los correos electrónicos que obran en el proceso y en el SIRNA.**

De celebrarse alguna audiencia se hará a través de la plataforma LIFESIZE.

## II. ANTECEDENTES

El señor Jorge Ernesto Andrade, actuando en nombre propio y en representación de los “vecinos del barrio Lleras Camargo”, el **6 de septiembre de 2022**<sup>1</sup> presentó demanda con medio de control protección de derechos e intereses colectivos e invocó la protección de la moralidad administrativa.

La demanda y los documentos aportados contenían apartes ilegibles y parecía que el demandante, quien dice actuar en su propio nombre y del barrio Lleras Camargo, invocara derechos de naturaleza subjetiva cuando se refiere al señor Alberto García Villareal, lo cual no es admisible en el ámbito de la acción popular, porque ella solo está dirigida a proteger derechos colectivos.

Por lo anterior, con auto de **7 de septiembre de 2022** se **inadmitió** la demanda con el fin que: a) aportara nuevamente la demanda y la documental legible; b) Expresara con claridad los hechos y derechos colectivos que estima vulnerados y explicara el contenido de su violación. c) precisara las autoridades a quienes atribuye la vulneración pues en distintos apartes se refiere a la Presidencia de la República, a la Superintendencia de Servicios Públicos y a EMCALI EICE ESP, sin indicar con claridad la vulneración o amenaza que atribuye a cada una. d) aportar el requerimiento previo de que trata el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011 respecto de las demandadas.

El mismo día el accionante aportó documental legible.

Fundamentó la demanda en que pidió el 11 de julio de 2012 a la Presidencia de la República reformar o liquidar la Superintendencia de Servicios Públicos o que sea el pueblo a través de un referendo o plebiscito quien decida si la liquida o no, pues la entidad demora en resolver las peticiones hasta un año, con lo que irrespeta los derechos fundamentales del pueblo colombiano, agregó que los empleados no cumplen con su jornada laboral y son improductivos.

Señaló al señor Alberto García Villareal, a quien acusó de no instalar los aparatos de medición de acueducto y energía de su vivienda. Agregó que a EMCALI E.S.P. y a la Superintendencia de Servicios Públicos no les importa los inconvenientes que ha sufrido ni han dado respuesta oportuna a su petición.

Aportó escrito dirigido al presidente de la República el 11 de julio de 2022 en el que manifestó su inconformidad con el funcionamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos e indicó que el señor Alberto García Villareal en diferentes peticiones solicitó la cuenta de cobro hasta el mes de agosto de 2013, pero no se le ha brindado respuesta, lo cual lo está perjudicando de manera grave y EMCALI EICE ESP lo está obligando a pagar desde el mes de septiembre de 2013 hasta el mes de julio de 2022, cuando no debe hacerlo porque tiene un lote vacío y no existe conexión fraudulenta.

Además, agregó que la Superintendencia de Servicios Públicos debe de ordenarle a EMCALI EICE ESPS que realice el cobro solo hasta el mes de agosto de 2013 y ajuste los valores que le están cobrando en atención a la situación y pueda adquirir los servicios con un nuevo contrato y facilidades de pago.

De la lectura del libelo demandatorio no se advierte que la parte actora haya subsanado los vicios anotados en el auto de 7 de septiembre de 2022, pues, pese a que dice actuar en representación de los “vecinos del barrio Lleras Camargo”, pretende el reconocimiento de derechos individuales o subjetivos que no se tramitan por el medio de control elegido.

Al efecto, la Sala de Decisión recuerda que:

El artículo 2 de la Ley 472 de 1998 impone que las acciones populares “*son los medios procesarles para la protección de los derecho e intereses colectivos*” y se ejercen para “*evitar el daño contingente y hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio de los derecho e **intereses colectivos***”.

A su vez, el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011 indicó que “*cualquier persona puede demandar la protección de los derechos colectivos e intereses colectivos para lo cual podrá pedir que se adopten medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos...*”

Respecto a la naturaleza de la acción popular el Consejo de Estado<sup>1</sup> considera:

El artículo 88 de la Constitución Política consagró la acción popular para la protección de derechos e intereses colectivos, instrumento procesal que fue reglamentado a través de la Ley 472 de 1998. Según lo dispuesto en el artículo 2 de la mencionada ley, en concordancia con el artículo 144 del CPACA, cualquier persona puede ejercer la acción popular para: **(i)** evitar el daño contingente; **(ii)** hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio **sobre los derechos e intereses colectivos** o **(iii)** restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible, y procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares que haya violado o amanece violar los derechos colectivos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 472 de 1998.

Claro está que la acción popular tiene por objeto la protección de intereses y derechos colectivos, que pertenecen a la comunidad en general, de manera que ese mecanismo procesal **no fue instituido para defender un derecho subjetivo particular. De hecho, la Corte Constitucional ha señalado que la acción popular se caracteriza por carecer de contenido subjetivo y, por tal razón, a través de dicho medio no resulta posible, en principio, perseguir un resarcimiento de tipo pecuniario en favor de quien promueve el reclamo judicial de un interés colectivo**<sup>2</sup>.

Dicho de otra manera, como las acciones populares tienen un fin público, que es la protección de derechos colectivos, *“no plantean en estricto sentido una controversia entre partes que defienden intereses subjetivos”*, al punto de que se ha considerado que esta clase de procesos goza de una estructura especial que los diferencia de los demás procesos de contenido litigioso, *“ya que no plantea una verdadera Litis, pues lo que persigue es la efectividad y eficacia de un derecho colectivo haciendo cesar su lesión o amenaza o logrando que las cosas vuelvan a su estado anterior”*<sup>3</sup>.

Por su parte la Corte Constitucional en sentencia C- 644 de 2011 consideró:

La jurisprudencia constitucional ha definido las acciones populares como el medio procesal con el que se busca asegurar una protección judicial efectiva de los derechos e intereses colectivos, afectados o amenazados por las actuaciones de las autoridades públicas o de un particular, teniendo como finalidades: a) evitar el daño contingente (preventiva); b) hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio sobre esa categoría de derechos e intereses (suspensiva); c) o restituir las cosas a su estado anterior (restaurativa). **A partir de tal definición, el objetivo de las acciones populares es, entonces, defender los derechos e intereses colectivos “de todas aquellas actividades que ocasionen perjuicios a amplios sectores** de la comunidad, como por ejemplo la inadecuada explotación de los recursos naturales, los productos médicos defectuosos, la imprevisión en la construcción de una obra, el cobro excesivo de bienes o servicios, la alteración en la calidad de los alimentos, la publicidad engañosa, los fraudes del sector financiero, etc.”. La Corte ha precisado que los derechos colectivos se caracterizan por ser **derechos de solidaridad, participativos y no excluyentes, de alto espectro en cuanto no constituyen un sistema cerrado a la evolución social y política, que pertenecen a todos y cada uno de los individuos y que, como tales, exigen una labor anticipada de protección y una acción pronta de la justicia**, inicialmente dirigida a impedir su afectación y, en su defecto, a lograr su inmediato restablecimiento, lo cual, precisamente, se logra a través de las llamadas acciones colectivas, populares y de grupo. En cuanto a las características que identifican las acciones populares, se destacan: a) Las acciones populares pueden ser promovidas por cualquier persona, natural o jurídica, a nombre de la comunidad cuando ocurra un daño o amenaza a un derecho o interés común, sin más requisitos que los que establezca el procedimiento regulado por la ley; b) Las acciones populares son ejercidas contra las autoridades públicas por sus acciones y omisiones y por las mismas causas, contra los particulares, en razón a su posición dominante frente a la mayoría de la comunidad; c) **Las acciones populares tienen un fin público, la protección de un derecho colectivo**; d) Las acciones populares son de naturaleza preventiva, luego su ejercicio o promoción judicial no está supeditado o condicionado a que exista un daño o perjuicio de los derechos o intereses que se buscan proteger, basta con que se presente la amenaza o el riesgo de que se produzca el daño; e) **Las acciones populares tienen también un carácter restitutorio, en la medida en que persiguen el restablecimiento del uso y goce de los derechos e intereses colectivos**; f) **Las acciones populares no persiguen en forma directa un resarcimiento de tipo pecuniario**, aunque en algunos casos, el legislador ha previsto el reconocimiento de los gastos en que incurra el actor popular, o de una recompensa, que, en todo caso, no puede convertirse en el único incentivo

<sup>1</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejera Ponente Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 19 de mayo de 2020, Radicación número: 08001-23-33-000-2018-00561-01 (AP).

<sup>2</sup> Esto se consideró en la sentencia C - 215 de 1999: *“Ese carácter público, implica que el ejercicio de las acciones populares supone la protección de un derecho colectivo, es decir, de un interés que se encuentra en cabeza de un grupo de individuos, lo que excluye motivaciones meramente subjetivas o particulares. No obstante, suponen la posibilidad de que cualquier persona perteneciente a esa comunidad, pueda acudir ante el juez para defender a la colectividad afectada, con lo cual se obtiene de manera simultánea, la protección de su propio interés (...) La carencia de contenido subjetivo de las acciones populares implica que en principio, no se puede perseguir un resarcimiento de tipo pecuniario en favor de quien promueve el reclamo judicial de un interés colectivo. Solamente, en algunos casos, el legislador ha previsto el reconocimiento de los gastos en que incurra la persona que actúa en defensa del interés público o de una recompensa, que de todas maneras no puede convertirse en el único incentivo que debe tener en mira quien debe obrar más por motivaciones de carácter altruista y solidario, en beneficio de la comunidad de la que forma parte”* (M.P. Martha Victoria Sánchez de Moncaleano).

<sup>3</sup> Sentencia SU 649 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

que ha de tener en cuenta quien debe obrar más por motivaciones de carácter altruista y solidario, en beneficio de la comunidad de la que forma parte; g) Las acciones populares gozan de una estructura especial que las diferencia de los demás procesos litigiosos, pues **no plantean en estricto sentido una controversia entre partes que defienden intereses subjetivos**, sino que son un mecanismo de protección principal de los derechos colectivos preexistentes.

En conclusión, al no haber sido subsanada la demanda y carecer de una finalidad de amparo de derechos e intereses colectivos, se impone su rechazo.

En consecuencia y conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 20 de la ley 472 de 1998 se impone rechazar de la demanda.

**DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión,


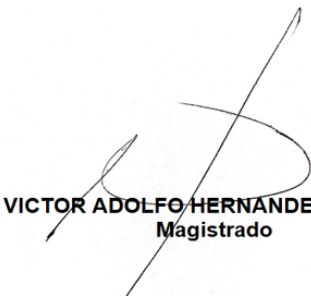

**RESUELVE**

**PRIMERO: RECHAZAR** la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO: NOTIFICAR** esta decisión en la forma dispuesta en la ley 2080 de 2021.

Esta decisión fue discutida y aprobada en **Sala Virtual** de la fecha, según consta en acta que se entrega a la Secretaría de la Corporación por medios virtuales, atendiendo las circunstancias de salubridad pública que se presentan en el país a raíz del COVID-19 y suscrita electrónicamente en la plataforma <http://samairj.consejodeestado.gov.co/> en donde se puede corroborar su autenticidad.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

 <b>ZORANNY CASTILLO OTALORA</b> Magistrada	 <b>VICTOR ADOLFO HERNANDEZ DIAZ</b> Magistrado
 <b>ANA MARGOTH CHAMORRO BENAIDES</b> Magistrada	